CONSTANCIA SECRETARIAL: Dentro del término de traslado dispuesto en la lista fijada el 17 de agosto de 2023, Socimedicos S.A.S. y los demandantes allegaron alegatos de conclusión, tal como se observa en los archivos 06 y 07 del cuaderno de segunda instancia. Balestra Group S.A.S. - En Liquidación guardó silencio.

Diego Andrés Morales Gómez

Secretario

Sin necesidad de firma Art. 2, inc. 2 Ley 2213 de 2022 y art. 28 Acuerdo PCSJA20-11567

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Proceso: Ordinario Laboral
Demandante: Liliana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra
Juzgado de origen: Quinto Laboral del Circuito de Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL

Magistrada Ponente: **Ana Lucía Caicedo Calderón**

Pereira, Risaralda, veintidós (22) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Acta No. 04 del 18 de enero de 2024

Teniendo en cuenta que el artículo 15 del Decreto No. 806 del 4 de junio de 2020, adoptado como legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, estableció que en la especialidad laboral se proferirán por escrito las providencias de segunda instancia en las que se surta el grado jurisdiccional de consulta o se resuelva el recurso de apelación de autos o sentencias, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por las Magistradas ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, como ponente, y OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, y el Magistrado GERMÁN DARIO GOEZ VINASCO, procede a proferir la siguiente sentencia escrita dentro del proceso ordinario laboral instaurado por **LILIANA PATRICIA ESCOBAR SALDAÑA, MARTHA CECILIA OSORIO MINOTA, JENNY JHOANA VEGA YEPES, BEATRIZ LLANO LÓPEZ, AMPARO JULIET VANEGAS QUICENO, MARÍA ADRIANA PATRICIA ACEVEDO GONZÁLEZ, MARÍA ONELCY GARCÍA PIZANO, LUZ MERY CÓRDOBA FLÓREZ, ÁLVARO JAVIER ARREDONDO SÁNCHEZ, LUIS EDUARDO GAMBA y CARLOS ALBERTO RÍOS BARCO** en contra de la **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.S. - SOCIMEDICOS S.A.S. y BALESTRA GROUP S.A.S. EN LIQUIDACIÓN.**

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilibiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

Es el caso resaltar que, aunque inicialmente la señora SHIRLLY SORLEY CASTILLO GONZÁLEZ como demandante, esta desistió de las pretensiones de la demanda y su desistimiento se aceptó en la audiencia de que trata el art. 77 del CPT y SS.

PUNTO A TRATAR

Por medio de esta providencia procede la Sala a resolver los recursos de apelación presentados por ambas partes, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 26 de junio de 2023 y a la cual se le realizó corrección por error aritmético por medio de auto del 14 de julio de 2023, conforme al artículo 69 del C.P.T. y de la S.S. Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:

1. La demanda y la contestación de la demanda

Los 11 demandantes pretenden declarar la existencia de un contrato realidad entre cada uno y SOCIMEDICOS S.A.S., como intermediario BALESTRA GROUP SAS., por lo que ambas entidades son solidariamente responsables de sus acreencias laborales. En consecuencia, persiguen que se condene a quien señalan como su verdadera empleadora y a la intermediaria a pagar en favor de cada uno su salario, primas de servicios, compensación por vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria e indemnización por no consignación de las cesantías.

Como sustento de sus pretensiones afirman que su vinculación con "SOCIMEDICOS S.A.S y/o IPS CLÍNICA SAN RAFAEL", se hizo a través de la entidad BALESTRA GROUP S.A.S, mediante aparentes contratos de prestación de servicios, dentro de las circunstancias de tiempo modo y lugar que fueron impuestas por SOCIMEDICOS S.A.S y/o IPS CLÍNICA SAN RAFAEL, puesto que durante el tiempo servido, se encontraron bajo la continua subordinación y dependencia de aquella, al tener que cumplir sus órdenes y el horario de trabajo impuesto, así como atender todos sus pacientes, todo ello dentro de los siguientes extremos laborales, cargos y remuneración:

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Liliana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

TRABAJADOR	SALARIO MENSUAL	CARGO	LAPSO
Martha Cecilia Osorio Minota	\$1.770.000	Auxiliar de laboratorio	28 de mayo de 2018 a 21 de junio de 2018
Liliana Patricia Escobar Saldaña	\$2.315.000	Bacterióloga	14 de mayo de 2018 a 18 de junio de 2018
Jenny Jhoana Vega Yepes	\$1.770.000	Auxiliar de laboratorio	03 de junio de 2018 a 19 de junio de 2018
Beatriz Llano López	\$1.770.000	Auxiliar de procedimientos	24 de junio de 2018 a 03 de julio de 2018
Amparo Juliet Vanegas Quiceno	\$1.770.000	Auxiliar de laboratorio	14 de mayo de 2018 a 21 de junio de 2018
Shirly Sorley Castillo González	\$1.770.000	Auxiliar de laboratorio	20 de mayo de 2018 a 19 de junio de 2018
María Adriana Acevedo González	\$1.770.000	Auxiliar de procesos	01 de junio de 2018 a 01 de julio de 2018
María Onelcy García Pizano	\$1.770.000	Auxiliar de procesos	01 de junio de 2018 a 01 de julio de 2018
Luz Mery Córdoba Flórez	\$1.770.000	Auxiliar de laboratorio	15 de mayo de 2018 a 15 de junio de 2018
Álvaro Javier Arredondo Sánchez	\$1.190.000	Mensajero	01 de junio de 2018 a 01 de julio de 2018
Luis Eduardo Gamba	\$1.300.000	Auxiliar de bodega	01 de junio de 2018 a 01 de julio de 2018
Carlos Alberto Ríos Barco	\$1.190.000	Mensajero	28 de mayo de 2018 a 02 de julio de 2018

Afirman que, durante sus vinculaciones, no se les pagó sus salarios, prestaciones sociales y vacaciones y que las funciones desempeñadas eran permanentes y propias de SOCIMEDICOS S.A.S., por el contrato comercial celebrado entre esta y BALESTRA GROUP para que atendiera a sus usuarios, hasta el 03 de julio que se les notificó la terminación de sus contratos.

En respuesta a la demanda, la **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.S. - SOCIMEDICOS S.A.S.** se opuso a la totalidad de las pretensiones, argumentando que no ha tenido ningún tipo de vinculación contractual con los demandantes y que por el contrario, celebró contrato verbal de prestación de servicios con Balestra Group S.A.S. en liquidación, cuyo objeto era la prestación del servicio de laboratorio clínico en toma y procesamiento de muestras, en las sedes de Cuba y Mega centro de alta complejidad de la IPS Clínica San Rafael y que, por ello, los demandantes prestaron sus servicios en un espacio de uso exclusivo de Balestra Group S.A.S., ya que Socimedicos S.A.S. no impartió órdenes, ni asignó funciones. De

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Liliana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

acuerdo con ello, propuso como excepciones de mérito principales las que denominó "inexistencia de vínculo laboral entre los demandantes y SOCIMEDICOS S.A.S", "inexistencia de intermediación" y como subsidiarias "buena fe" y "prescripción".

Por su parte, pese a ser notificada en debida forma, **BALESTRA GROUP S.A.S. EN LIQUIDACIÓN** guardó silencio.

2. Sentencia de primera instancia

La jueza de primer grado declaró que entre los DEMANDANTES y BALESTRA GROUP S.A. en liquidación, existieron contratos de trabajo, que se desarrollaron en los siguientes extremos temporales; **1)** Liliana Patricia Escobar Saldaña del 15 de mayo al 18 de junio de 2018, **2)** Martha Cecilia Osorio Minota del 28 de mayo al 21 de junio de 2018, **3)** Jenny Jhoana Vega Yepes 03 al 19 de junio de 2018, **4)** Beatriz Llano López 24 de junio al 03 de julio de 2018, **5)** Amparo Juliet Vanegas Quiceno 15 de mayo al 15 de junio de 2018, **6)** María Adriana Patricia Acevedo González 01 de junio al 01 de julio de 2018, **7)** María Onelcy García Pizano 01 de junio al 01 de julio de 2018, **8)** Luz Mery Córdoba Flórez 15 de mayo al 15 de junio de 2018, **9)** Álvaro Javier Arredondo Sánchez 01 de junio al 01 de julio de 2018, **10)** Luis Eduardo Gamba 01 de junio al 01 de julio de 2018 y; **11)** Carlos Alberto Ríos Barco 28 de mayo al 2 de julio de 2018.

Seguidamente condeno a BALESTRA GROUP S.A. en liquidación a reconocer y pagar en favor de los demandantes los salarios, vacaciones y prestaciones sociales causados durante la vigencia de las relaciones laborales, así:

1) Liliana Patricia Escobar Saldaña salario: \$956.398, vacaciones: \$35.807, prima: \$79.700 cesantías: \$79.700 intereses a las cesantías \$877; **2) Martha Cecilia Osorio Minota** salario: \$666.581, vacaciones: \$24.956, prima: \$55.548, cesantías: \$55.548, intereses a las cesantías: \$426; **3) Jenny Jhoana Vega Yepes** salario: \$463.708, vacaciones: \$17.361, prima: \$38.642, cesantías: \$38.642, intereses a las cesantías: \$206; **4) Beatriz Llano López** salario: \$260.836 vacaciones: \$9.766, prima: \$21.736, cesantías: \$21.736, intereses a las cesantías: \$65, indemnización por despido: \$19.531; **5) Amparo Juliet Vanegas Quiceno** salario: \$869.453, vacaciones: \$32.552, prima: \$72.454, cesantías: \$72.454, intereses a las cesantías: \$725; **6) María Adriana Patricia Acevedo González** salario: \$869.453, vacaciones: \$32.552, prima: \$72.454, cesantías: \$72.454, intereses a la cesantías: \$725; **7) María Onelcy García Pizano**

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Liliana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

salario: \$869.453, vacaciones: \$32.552, primas: \$72.454, cesantías: \$72.454, intereses de la cesantía: \$725; **8) Luz Mery Córdoba Flórez** salario: \$869.453, vacaciones: \$32.552, primas: \$72.454, cesantías: \$72.454, intereses a las cesantías: \$725; **9) Álvaro Javier Arredondo Sánchez** Salario: \$869.453 vacaciones: \$32.552, primas: \$72.454, cesantías: \$72.454, intereses a las cesantías: \$725; **10) Luis Eduardo Gamba** salario: \$869.453, vacaciones: \$32.552, primas: \$72.454, cesantías: \$72.454, intereses a las cesantías: \$725; **11) Carlos Alberto Ríos Barco** salario: \$985.380, vacaciones: \$36.892, primas: \$82.115, cesantías: \$82.115, intereses a las cesantías: \$931.

Asimismo, condenó a BALESTRA GROUP S.A. en liquidación a reconocer y pagar en favor de los demandantes la indemnización moratoria a partir de la fecha siguiente a la terminación del contrato de trabajo a cada uno de los actores, hasta cuando se efectúe su pago, con la salvedad que, si se suscribe el acta final de liquidación de la entidad antes del pago, la sanción moratoria se causará hasta esa fecha.

Finalmente, declaró solidariamente responsable a SOCIMEDICOS S.A.S., de los créditos laborales reclamados y la absolvió de las demás pretensiones incoadas en su contra, condenando en costas a las demandadas en un 80% en favor de los demandantes a prorrata.

Para arribar a tal determinación, la A-quo, consideró, con apoyo en el material probatorio obrante en el proceso, que los demandantes fueron contratados y prestaron sus servicios en el laboratorio de la clínica San Rafael que fue administrada u operada por BALESTRA GROUP S.A en virtud del contrato de prestación de servicios que hubo entre esta y SOCIMEDICOS S.A.S, siendo el verdadero empleador BALESTRA GROUP S.A, puesto que su personal era el que impartía las órdenes, controlaba el horario, concedía permisos y a quienes se les reportaban las novedades, además que era propietario de los equipos con los cuales se prestaba el servicio y tenía a título de comodato las instalaciones donde operaba el laboratorio, siendo SOCIMEDICOS el beneficiario del trabajo de los demandantes, más no su empleador, pues estos atendían exclusivamente a los pacientes hospitalizados en dicha IPS.

En línea con lo anterior, agregó que como quedó acreditado que los demandantes sí prestaron sus servicios en favor de BALESTRA GROUP S.A y que no les fueron cancelados sus salarios, prestaciones sociales y las indemnizaciones correspondientes, de acuerdo a la confesión ficta por inasistencia al interrogatorio de parte, es procedente ordenar su pago, para lo cual, dio credibilidad a las afirmaciones de los demandantes

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilibiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

respecto a los hitos, por ser próximos a las fechas del contrato comercial aceptado por SOCIMEDICOS S.A.S., por lo cual, al no haber prueba de la fecha exacta de inicio, al ser confesado que el contrato comercial entre ambas sociedad inicio el 15 de mayo de 2018, a partir de esta fecha o con posterioridad debieron iniciar a laborar los accionantes y hasta máximo el 03 de julio de 2018, puesto que la terminación se presumió igualmente como cierta, salvo para aquellos trabajadores que dieron cuenta de un finiquito laboral en fecha anterior. En cuanto a la base salarial, arguyó que como no se probó una remuneración exacta, debe ser tomado el salario mínimo.

Finalmente, indicó que no había lugar a la indemnización por terminación del contrato por cuanto los trabajadores aceptaron que el finiquito obedeció a renuncia y solo una de las demandantes no lo hizo, por lo que es a la única que le corresponde tal indemnización y que, como SOCIMEDICOS S.A.S se benefició de los servicios prestados y las labores ejercidas no le eran extrañas en su condición de IPS, de acuerdo a su objeto social, en virtud de las facultades extra petita, debe responder solidariamente, así no se haya alegado en los fundamentos de la demanda, puesto que sí se debatió su beneficio y ese es el fundamento de la solidaridad.

3. Recurso de Apelación

El **apoderado judicial de los demandantes** presentó inconformidad frente a la sentencia de primera instancia en cuanto al salario tenido en cuenta para liquidar las acreencias laborales, argumentando que existe una presunción por no contestación de la demanda por parte de BALESTRA GROUP S.A, quedando acreditado que cada uno de los demandantes gozaba del salario que se indicó en la demanda, los cuales también se reflejan en los documentos allegados como prueba, propiamente en el contrato de prestación de servicios y las cuentas de cobro y, por ello, deben ser liquidadas nuevamente todas las prestaciones sociales y vacaciones de cada uno de los actores.

Por otra parte, reprochó que no se reconociera a todos los demandantes la indemnización por la terminación del contrato, toda vez que fue la falta de pago lo que los llevó a renunciar, presentándose un despido indirecto.

Por su parte, la **apoderada judicial de la demandada**, al sustentar la alzada, argumentó que al condenarla solidariamente responsable se violó el derecho fundamental al debido proceso y derecho de defensa, ya que el uso de la facultad extra petita en

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilibiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

materia laboral no es ilimitada y que si se tiene en cuenta la fijación del litigio, allí se indicó que la solidaridad a estudiar era respecto a la intermediación y de cara a ello, en conjunto con lo expuesto en la demanda, es que ejerció su derecho de defensa y contradicción no contra otras solidaridades diferentes, y, por ello, no puede sorprenderse como parte pasiva con una decisión respecto de una solidaridad diferente a la alegada en la demanda y además diferente a la planteada en la fijación del litigio, existiendo incluso incertidumbre respecto a cuál fue el fundamento jurídico de esa solidaridad.

Por otra parte, alegó que en la contestación de la demanda propuso como excepción de mérito subsidiaria la buena fe, la cual no fue analizada en el momento en que la señora Jueza determinó esa solidaridad, especialmente relacionada con la condena de la indemnización moratoria, ya que si bien respecto de BALESTRA GROUP S.A, se decidieron unas cosas no puede extenderse esa mala fe y condena a SOCIMEDICOS S.A.S, quienes durante todo el proceso demostró que sí actuó de buena fe.

4. Alegatos de conclusión

Analizados los alegatos presentados por las partes, mismos que obran en el expediente digital y a los cuales nos remitimos por economía procesal en virtud del artículo 280 del C.G.P., la Sala encuentra que los argumentos fácticos y jurídicos expresados concuerdan con los puntos objeto de discusión en esta instancia y se relacionan con el problema jurídico que se expresa más adelante.

5. Problema jurídico por resolver

Atendiendo los argumentos de los recursos, le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

- Determinar el salario devengado por cada demandante durante la relación laboral.
- Establecer si hay lugar a imponer al demandado la indemnización por terminación unilateral del contrato – despido indirecto.

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilibiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

- Verificar si podía la a-quo, en este caso, acudir a las facultades extra y ultra petita para declarar solidariamente responsable a SOCIMEDICOS S.A.S. de las acreencias adeudadas por BALESTRA GROUP S.A.S, en calidad de beneficiario de la obra.

6. Consideraciones

6.1. Carga de la prueba- Despido indirecto.

La terminación del contrato laboral de manera unilateral y por justa causa está reglamentada en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que impone dos limitaciones a la parte que le ponga fin a la relación laboral: una sustancial y otra de procedimiento. La primera tiene que ver con las causas para terminar el contrato, que están expresamente determinadas para cada parte, existiendo para el caso del empleador quince (15) causales enumeradas en el literal a) y para el trabajador las ocho (8) del literal b) La segunda limitación se refiere a la forma de terminar el contrato, reglada en el párrafo del mismo artículo e impone a la parte que decida terminar la relación laboral que le manifieste a la otra, en el momento de la extinción.

Ha de anotarse que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-594 del 20 de noviembre de 1997, con ponencia del Dr. Alejandro Martínez Caballero, al declarar la exequibilidad de dicho párrafo, extendió el alcance de dicha norma al disponer que se entiende que no basta con invocar una causal de manera genérica sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan dicha decisión, lo que significa que es indispensable que informe los fundamentos fácticos o hechos que motivaron el despido, criterio o exigencia que fue reiterada en la Sentencia C-299 del 17 de junio de 1998, en la que actuó como Magistrado Ponente el Dr. Carlos Gaviria Díaz.

Ahora bien, como es bien sabido, cuando es el trabajador el que de manera unilateral da por terminado el contrato de trabajo invocando una justa causa imputable al empleador, de conformidad con lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, se configura el despido indirecto o autodespido, caso en el cual, el primero debe responder con el pago de la indemnización por despido injusto consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

No obstante, para que el trabajador acceda a la indemnización correspondiente, debe demostrar que el empleador incurrió en alguna de las 8 causales contempladas en

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilitiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

el literal b) del artículo 62 del mismo código y que al momento de dar por terminado el vínculo laboral le informó al empleador la causa o el motivo de esa determinación.

Respecto de la carga de la prueba en este tipo de asuntos, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia que le compete al trabajador, además de acreditar la renuncia motivada, los hechos fundantes de la misma, así lo dijo en la sentencia CSJ 1628-2018, en la que explicó lo siguiente:

“Resulta pertinente recordar lo que de antaño ha adocinado esta Corporación en el sentido de que cuando el trabajador termina unilateralmente el contrato de trabajo aduciendo justas causas para ello, mediante la figura del despido indirecto o auto despido, tiene la carga de demostrar, además de la decisión de la renuncia motivada comunicada al empleador al momento de su retiro, los hechos en los cuales edificó su decisión. Ahora, si este último, a su vez, alega hechos con los cuales pretende justificar su conducta, es incuestionable que a él le corresponde probarlos. Situación diferente acontece cuando el empleador es quien pone fin al vínculo contractual en forma unilateral, invocando justas causas para esa decisión, en cuyo caso el trabajador únicamente tiene el deber de probar el hecho del despido y al empleador las razones o motivos allí señalados (CSJ SL 22, abr, 1993 rad. 5272).”

Finalmente, cabe precisar que no se trata de un simple incumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa para que el trabajador tenga un justo motivo atribuible al empleador para renunciar, sino que el precepto regulador de la causal exige que este sea sistemático, entendiéndose con ello que debe ser regular, periódico o continuo, que apunte a demostrar que el empleador ha tomado la conducta o el propósito de incumplir, tal como ha sido establecido en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral (CSJ SL 4207-2018, CSJ SL9660-2014, CSJ SL 11, may, 2006 rad. 26951).

6.2. Principio de congruencia – excepciones.

De conformidad con principio de congruencia contemplado en el artículo 281 del estatuto procesal *“la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.”*

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilitiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

En relación con dicho principio, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el juez no está limitado a la literalidad de las reclamaciones o *causa petendi*, sino a la fundamentación y demostración que sobre estas haga el actor, a quien se le impone el deber de aportar los elementos de juicio que las acrediten y conduzcan a una decisión favorable. (CSJ SL 3980-2021)

Así las cosas, la congruencia no se limita a que las condenas impuestas sean un calco de las pretensiones de la demanda, pues bien puede ocurrir que la solución jurídica resultante del examen fidedigno y sin alteración de los hechos y con respaldo en el ordenamiento normativo, sea distinta a la propuesta por el demandante. Verbigracia, cuando se reclama la nulidad del traslado, pero lo que procede es la ineficacia, y así se declara. Es por ello que la demostración de la incongruencia no se puede limitar a un cotejo mecánico entre las pretensiones de la demanda y lo decidido por el juez, pues también es preciso poner de presente la actividad que despliega el fallador en su labor de juzgamiento para resolver el litigio mediante la interpretación o aplicación de la ley sustancial, según las apreciaciones probatorias del litigio, caso en el cual, los aspectos meramente jurídicos o razonamientos de puro derecho y los medios de orden público, no constituyen medios nuevos. (Ver sentencias CSJ SL3850-2020, CSJ SL1910-2020).

Cabe señalar que la jurisprudencia laboral se opone a que las decisiones judiciales, menos aún las dictadas en sede de casación, se funden en hechos y pretensiones nuevas que no se plantearon en la demanda y frente a los que los cuales la parte demandada no tuvo oportunidad de resistir. Al respecto, en la sentencia CSJ SL591 de 2023, dejó claro que la Ley procesal proscribió que el juez en la sentencia varíe la causa petendi con la introducción de hechos nuevos o modifique el petitum de la demanda o los medios exceptivos propuestos por la contraparte, salvo cuando la ley habilite su actuación oficiosa.

Por lo anterior, ha adoctrinado la Corte entre otras en la sentencia CSJ SL2159-2022 que el principio de congruencia tiene determinadas excepciones en el ordenamiento jurídico, entre ellas: i) el juez advierte fraude, colusión o una situación abiertamente ilegal que amerite una intervención excepcionalísima en aras de proteger los derechos fundamentales de las partes -artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social-, ii) existencia de hechos sobrevinientes, iii) aplicación del principio de *iura novit curia* (CSJ SL2966-2022; iv) el uso de las facultades ultra y extra petita, -artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social-.

En lo que atañe a la última excepción, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL 3850-2020, que memora la sentencia CSJ SL 2808-2018, explicó que:

“La facultad extra petita -por fuera de lo pedido- requiere rigurosamente que los hechos que originan la decisión (i) hayan sido discutidos en el proceso, y (ii) que estén debidamente acreditados, a fin de no quebrantar frontalmente los derechos constitucionales al debido proceso con violación de los derechos de defensa y contradicción de la llamada a juicio.

Y por su parte, la ultra petita -más allá de lo solicitado- exige que la súplica impetrada en el escrito inicial, (i) sea inferior a la estatuida en la norma laboral, y que (ii) que no emerja del juicio que el mayor valor hubiese sido cancelado al trabajador acreedor”.

6.3. Solidaridad entre contratista independiente y beneficiario de la obra o labor contratada

A propósito del concepto de solidaridad en materia laboral, La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia No. 35864 del 1º de marzo de 2011, con ponencia del magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza, recogiendo lo dicho en la sentencia del 25 de mayo de 1968, citada entre otras en la del 26 de septiembre de 2000, radicación 14038, realizó las siguientes consideraciones que ofrecen claridad y precisión sobre la materia, señaló el alto tribunal: *“(…) lo que se busca con la solidaridad laboral del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo es que la contratación con un contratista independiente para que realice una obra o preste servicios, no se convierta en un mecanismo utilizado por las empresas para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Por manera que, si una actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la empresa se contrata para que la preste un tercero, pero utilizando trabajadores, existirá una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales de esos trabajadores”.* Y agregó: *“(…) si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que éste adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una*

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Liliana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales”.

Por demás, para que la solidaridad opere, además de que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario de la obra o el trabajo, se requiere que ella constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico. Igualmente, vale añadir que la Sala Laboral ha admitido la posibilidad de que opere la solidaridad tomando en cuenta para ello la actividad específica desarrollada por el trabajador y no sólo el objeto social del contratista y el beneficiario de la obra. Así lo dispuso en la sentencia del 24 de agosto de 2011, radicación 40.135, en la que se indicó: *“lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que sí, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará solidaridad establecida en el artículo citado”.*

6.4. Caso concreto

Partiendo del primer punto de la apelación presentada por la parte demandante, esto es, el valor con el cual la jueza de primera instancia liquidó las acreencias laborales, debe decirse que en el hecho 14 de la demanda se relacionaron los salarios devengados por los demandantes así: \$1.770.00 para Martha Cecilia Osorio Minota, Jenny Jhoana Vega Yepes, Beatriz Llano López, Amparo Julieth Vanegas Quiceno, María Adriana Acevedo González, María Onelcy García Pizano y Luz Mery Córdoba Flórez; \$2.315.000 para Liliana Patricia Escobar Saldaña; \$1.300.000 para Luis Eduardo Gamba y; \$1.190.000 para Álvaro Javier Arredondo Sánchez y Carlos Alberto Ríos Barco, frente a lo cual contestó SOCIMEDICOS S.A.S. que *“No me consta, teniendo en cuenta que los demandantes no han tenido vinculación contractual alguna con la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS SAS - SOCIMEDICOS SAS, mi representada desconoce toda actividad profesional o condiciones contractuales de los demandantes (...)”*, es decir que, este hecho, al no ser aceptado por el demandado debió ser sometido al debate probatorio.

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Liliana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

Por otra parte, si bien es cierto que ante la falta de contestación de la demanda por parte de BALESTRA GROUP S.A.S. EN LIQUIDACIÓN le acarreó como sanción un indicio grave en su contra, de acuerdo a lo indicado en el auto del 25 de enero de 2022, tal indicio no implica tener por cierto el valor del salario referenciado en la demanda, así como tampoco, operó la presunción ficta por inasistencia a la audiencia de conciliación sobre este supuesto fáctico en particular, puesto que en la diligencia llevada a cabo el 17 de marzo de 2023, la jueza de primera instancia indicó que los aspectos señalados en la demanda susceptibles de confesión y que se presumieron como ciertos corresponden a los que indicaron que a la totalidad de los demandantes no se les ha cancelado salario, prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías), la indemnización por despido injusto, y la sanción moratoria prevista en el artículo 65 de C.S.T. y que el 3 de julio los directivos de Balestra Group S.A.S., notificaron a la totalidad de los demandantes que no continuarían prestando sus servicios y que los contratos se daban por terminados.

Visto lo anterior, el argumento esgrimido por el apoderado judicial de la parte actora, respecto a la presunción de veracidad del salario señalado en la demanda para cada uno de los demandantes, carece de sustento, toda vez que para tener acreditado un hecho se requiere que el indicio este acompañado de otros para dar paso a una prueba indiciaria, quedando únicamente por verificar si, de acuerdo a la documental arrimada al plenario, es posible obtener respaldo sobre un valor superior al salario mínimo o, si ello se extrae de los interrogatorios de parte que operan como testimonios entre los litisconsortes facultativos.

Pues bien, en cuanto al material probatorio, debe decirse que con la demanda solo se anexó contratos de prestación de servicios de Liliana Patricia Escobar Saldaña y Martha Cecilia Osorio Minota, ambas con BALESTRA GROUP y sin firma, mientras que por los restantes demandantes se aportó únicamente la renuncia y/o cuenta de cobro, de acuerdo a la siguiente relación que se encuentra a partir de la página 07 del archivo 04 del cuaderno de primera instancia y que constan de cuentas de cobro y renunciaciones dirigidas a BALESTRA GROUP:

- Renuncia presentada por la señora Liliana Patricia Escobar Saldaña el 19 de junio de 2018.
- Cuenta de cobro del 31 de mayo de 2018 y renuncia fechada el 21 de junio de 2018, ambas a nombre de la señora Martha Cecilia Osorio Minota.

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilibiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

- Renuncia presentada por la señora Jenny Joana Vega Yepes el 19 de junio de 2018 y cuenta de cobro de la misma fecha.
- Cuenta de cobro presentada por la señora Beatriz Llano López el 3 de julio de 2018.
- Renuncia presentada el 19 de junio de 2018 por la señora Amparo Yulieth Vanegas Quiceno.
- Cuenta de cobro presentada por la señora María Adriana Patricia Acevedo González el 3 de julio de 2018.
- Cuenta de cobro presentada por la señora María Onelcy García Pizano el 3 de julio de 2018.
- Cuenta de cobro presentada por la señora Luz Mery Córdoba Flórez el 11 de julio de 2018.
- Cuenta de cobro presentada por el señor Álvaro Javier Arredondo Sánchez el día 3 de julio de 2018.
- Cuenta de cobro presentada por el señor Luis Eduardo Gamba el 3 de julio de 2018.
- Cuenta de cobro presentada por el señor Carlos Alberto Ríos Barco el 29 de junio de 2018.

Ahora, la documental relacionada no da cuenta del valor real devengado por los demandantes, puesto que, a lo sumo, de las misma se obtiene las sumas por ellos reclamadas como adeudadas, sin que se pueda entender que, por el solo hecho de haber sido recibidas por su empleadora, los valores allí consignados fueron aceptados.

Por otra parte, al rendir interrogatorio ninguno de los demandantes informó sobre el salario devengado o convenido para sus compañeros y se limitaron a afirmar que los pormenores del contrato fueron establecidos con la señora Mònica Torres de forma verbal y que, realmente durante el término del contrato no recibieron suma alguna como contraprestación del servicio.

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Liliana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

Así, atendiendo la jurisprudencia patria que ha sido clara en indicar que al demandante le corresponde la carga de demostrar un monto salarial específico o, contrario a ello, se presumiría que devengaba por lo menos el salario mínimo; ante la orfandad probatoria respecto a que devengaron una suma mayor al salario mínimo, supuesto sobre el cual, se itera, no recayó confesión ficta, no sale avante este punto de apelación y se confirmará la sentencia de primera instancia, como quiera que la liquidación efectuada por la a-quo se ajustó a derecho al tomar como base el salario mínimo vigente.

Superado lo anterior, continuando con el segundo punto de inconformidad de la activa, debe indicarse que, de acuerdo con el esquema de los recursos de apelación se encuentra por fuera de toda discusión que entre los DEMANDANTES y BALESTRA GROUP S.A. en liquidación existieron contratos de trabajo en los extremos temporales definidos en primera instancia, a saber:

- 1)** Liliana Patricia Escobar Saldaña del 15 de mayo al 18 de junio de 2018.
- 2)** Martha Cecilia Osorio Minota del 28 de mayo al 21 de junio de 2018.
- 3)** Jenny Jhoana Vega Yepes 03 al 19 de junio de 2018.
- 4)** Beatriz Llano López 24 de junio al 03 de julio de 2018.
- 5)** Amparo Juliet Vanegas Quiceno 15 de mayo al 15 de junio de 2018.
- 6)** María Adriana Patricia Acevedo González 01 de junio al 01 de julio de 2018.
- 7)** María Onelcy García Pizano 01 de junio al 01 de julio de 2018.
- 8)** Luz Mery Córdoba Flórez 15 de mayo al 15 de junio de 2018.
- 9)** Álvaro Javier Arredondo Sánchez 01 de junio al 01 de julio de 2018.
- 10)** Luis Eduardo Gamba 01 de junio al 01 de julio de 2018.
- 1)** Carlos Alberto Ríos Barco 28 de mayo al 2 de julio de 2018.

Como puede verse, la a-quo concluyó que los contratos de trabajo, salvo el de la señora Beatriz Llano López, culminaron por renuncia de los demandantes en fecha distinta al 03 de julio de 2018, calenda indicada en la demanda como de la terminación del contrato y que se había presumida como cierta, por lo cual, solo condenó a la empleadora a reconocer la indemnización por despido sin justa causa en favor de la señora Llano López, frente a lo cual, el apoderado de la activa presenta inconformidad, al aducir que en este caso se presentó un despido indirecto.

De acuerdo con ello, si bien quedó establecido en la sentencia de primera instancia,

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilibiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

sin que fuera motivo de reproche, que BALESTRA GROUP incumplió con sus obligaciones patronales, al no efectuar el pago de los salarios correspondientes a la totalidad de los demandantes y que, de acuerdo a sus interrogatorios de parte, este fue el motivo de sus dimisiones, lo cierto es que ninguna de las cartas de renuncia allegadas indica el motivo que los llevaron a presentarlas e, incluso, María Adriana Patricia Acevedo González, María Onelcy García Pizano, Luz Mery Córdoba Flórez, Álvaro Javier Arredondo Sánchez, Luis Eduardo Gamba y Carlos Alberto Ríos Barco no aportaron la respectiva misiva y tampoco procuraron prueba testimonial que acreditara una renuncia verbal pero motivada.

En ese orden, como quiera que para que opere la indemnización por despido indirecto no basta con el incumplimiento del empleador, sino que debe ponerse de presente al momento de la terminación, de forma clara y precisa el motivo de la renuncia, muy a pesar de que se encuentra acreditada la falta de pago del salario, no es procedente en este caso acoger el segundo punto de apelación de la activa.

Concluido el estudio del recurso presentado por los demandantes, se ocupará la Sala de la apelación presentada por SOCIMEDICOS S.A.S. respecto a la responsabilidad solidaria impuesta por la a-quo, misma que argumenta atenta contra el debido proceso, al ser sorpresiva y no respetar los límites de las facultades ultra y extra petita con relación a la fijación del litigio.

Así, con apoyo en las premisas enunciadas en el acápite 6.2., debe advertir esta Corporación que prima facie el uso de las facultades instituidas en el artículo 50 del C.P.T y de la S.S. constituye una excepción al principio de congruencia; sin embargo, ello por sí solo no deriva en la vulneración de los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, siendo del caso reiterar que la jueza solo podía darse licencia de fulminar condena por fuera de lo pedido (extra petita), cuando los hechos que originan la decisión hayan sido discutidos en el proceso y además se encuentren debidamente acreditados. Estas limitaciones impiden que se decida caprichosamente y que se sorprenda a los demandados con condenas ajenas a la situación jurídico procesal, toda vez que la facultad discrecional no puede ser ajena al contexto fáctico definido en la demanda, pues de lo contrario se desconocería el principio de contradicción con grave afectación del derecho de defensa, en la medida que la parte demandada no tendría oportunidad de controvertir los supuestos fácticos que sustentan la condena por fuera de lo pedido.

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Liliana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

Puede ocurrir entonces que, en la demanda, en los medios de defensa o incluso en los alegatos, se planteen hechos que puedan dar lugar a condenas que no hayan sido reclamadas y en este contexto el juez laboral queda habilitado para fallar por fuera de lo pedido, siempre que tales hechos estén debidamente probados. Lo que no puede ocurrir es que el demandado resulte condenado por hechos o planteamientos nuevos respecto de los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse por no haber sido enunciados en la demanda o que hayan sido totalmente ajenos al debate fáctico. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el hecho se discute, pero no se acredita, o cuando un hecho no es ni siquiera mencionado, pero aparece probado.

El uso de la facultad discrecional consagrada en el artículo 50 del C.P.T. y de la S.S., exige para todos los casos que concurren unidos dos elementos habilitantes: el hecho discutido y el hecho probado, el uno sin el otro impide la condena extra petita, porque una decisión basada en hechos indiscutidos, es decir, no sometidos a controversia, vulnera el principio de contradicción y defensa, y el otro, porque la legalidad y legitimidad de la decisión estriba en su correspondencia con la realidad, es decir, en la conexión directa que debe tener con las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, tal como lo señala el artículo 164 del C.G.P.

De acuerdo con lo anterior, en aras de resolver el objeto del reproche de alzada, se tiene que en la demanda se pretendió la declaratoria de un contrato de trabajo entre cada uno de los demandantes y SOCIMEDICOS S.A.S. y que BALESTRA GROUP actuó como simple intermediario, por lo que se solicitó condenar a las demandadas a pagar las acreencias laborales causadas.

Asimismo, tal como lo expone la recurrente, la jueza en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T y de la S.S. celebrada el 17 de marzo de 2023, estableció como parte del problema jurídico: *“establecerse si BALESTRA GROUP S.A.S actuó como intermediaria en las relaciones laborales y, si BALESTRA GROUP S.A.S y SOCIMEDICOS S.A.S. son solidariamente responsables de las acreencias laborales”*.

Como puede verse, desde la presentación de la demanda, quedó claro que los actores pretendían el pago de acreencias laborales por parte de ambas demandadas y que, por ello, en la fijación del litigio se incluyó como problema jurídico la solidaridad entre las pasivas, no obstante, arguye la recurrente que el fundamento de la solidaridad alegada fue la intermediación y que, al no salir avante este punto, no era posible condenar

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilibiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

a SOCIMEDICOS S.A.S. como beneficiaria de la labor.

Al respecto, recuérdese que, de acuerdo con el artículo 34 del Código Sustantivo del trabajo prevé como presupuesto para que opere la solidaridad, que haya un beneficio en favor de un tercero -que no el empleador o contratista independiente- y que las labores no sean extrañas a aquel.

Por otra parte, señalan los hechos 13, 15, 16 y 17 de la demanda lo siguiente: que los demandantes prestaron sus servicios personales en la IPS CLÍNICA SAN RAFAEL, en la ciudad de Pereira (hecho 13); que durante el tiempo servido realizaron labores bajo la continua subordinación y dependencia de "SOCIMEDICOS S.A.S. y/o IPS San Rafael", toda vez que debían cumplir sus órdenes y el horario de trabajo impuesto, así como atender sus pacientes (hecho 15); que al desempeñar los cargos (auxiliares de laboratorio, auxiliar de procedimientos, auxiliar de procesos, auxiliar de bodega y mensajero), siempre tuvieron a cargo funciones permanentes y propias impuestas por la sociedad, labor que se cumplía en sus instalaciones (hecho 16) y; que BALESTRA GROIOUP celebró con SOCIMEDICOS S.A.S. un contrato con el objeto de que la primera, de manera autogestionaria, prestara fuerza laboral a la segunda, y atendiera a los usuarios, personas, beneficiarios y/o pacientes que esta remitiera para su atención en el área de salud (hecho 17)

Nótese entonces que todo el caudal fáctico de la demanda se centra en la prestación del servicio de los demandantes en favor de SOCIMEDICOS y de ello se desprende su beneficio frente a una labor que no le era extraña, como la atención de sus pacientes, fundamento constitutivo de la solidaridad declarada, por lo cual, aun cuando jurídicamente se planteó en la demanda una solidaridad por intermediación ilegal, puede tenerse por discutidos los hechos que configuran la solidaridad del beneficiario de la obra y el contratista independiente.

Y es que, siguiendo ese hilo, los hechos en que se funda la sentencia extra petita fueron afirmados y discutidos en el proceso porque desde el escrito primigenio se indicó que SOCIMEDICOS se benefició de la labor desarrollada por los demandantes, toda vez que atendían sus pacientes en sus mismas instalaciones y que ello obedeció a un contrato suscrito con BALESTRA GROUP, con lo cual se abrió la puerta a la verificación judicial del hecho, que, al haber sido demostrado por medio de los interrogatorios de parte que se valoran como testimonio frente a los litisconsortes facultativos, habilitó el uso de la

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilibiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

facultad extra petita, a la cual acudió la a-quo, dentro del margen discrecional que la da la norma, y, con base en ella, emitió la condena de que se duele la codemandada recurrente.

Este proceder oficioso se juzga ajustado a derecho y no merece reproche alguno de la Corporación, porque se enmarca dentro de la autonomía reglada del juzgador y expresa una facultad discrecional que solo puede ser refutada cuando se emplea por fuera de los parámetros que autoriza el legislador, lo cual no ocurre en este caso, puesto que no puede entenderse sorprendida con la condenada SOCIMEDICOS S.A.S. cuando desde los albores del proceso se le señaló como la beneficiaria del servicio, sin que el cambio de normatividad aplicable sea razón suficiente para que no proceda la declaratoria oficiosa.

Por lo anterior, se pasan a resolver los demás aspectos del recurso de apelación, esto es, la falta de valoración de la excepción de buena fe, frente a la indemnización moratoria a la que fue condenada solidariamente.

Pues bien, ha decantado la jurisprudencia patria que el empleador puede exonerarse de la sanción moratoria si demuestra un actuar desprovisto de mala fe, empero, ello no es aplicable para el obligado solidario, puesto que el fundamento de su responsabilidad no deviene de un actuar negligente, sino de su beneficio y de la contratación con terceros de labores que no le sean extrañas, por lo cual, inane resulta en este caso estudiar la configuración de la excepción de buena fe, en el entendido que, aun actuando SOCIMEDICOS bajo los postulados de la lealtad y probidad, no se exoneraría de responder solidariamente por las indemnizaciones y acreencias en favor de los demandantes.

Corolario de lo anterior, sin que salgan avante los recursos de apelación, se confirmará la sentencia de primera instancia y se abstendrá la sala de condena en costas en esta sede.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Primera de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Radicación No.: 66001-31-05-005-2019-00317-01
Demandante: Lilitiana Patricia Escobar Saldaña y otros
Demandado: Socimedicos S.A.S. y otra

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 26 de junio de 2023, dentro del proceso ordinario laboral promovido por por **LILIANA PATRICIA ESCOBAR SALDAÑA, MARTHA CECILIA OSORIO MINOTA, JENNY JHOANA VEGA YEPES, BEATRIZ LLANO LÓPEZ, AMPARO JULIET VANEGAS QUICENO, MARÍA ADRIANA PATRICIA ACEVEDO GONZÁLEZ, MARÍA ONELCY GARCÍA PIZANO, LUZ MERY CÓRDOBA FLÓREZ, ÁLVARO JAVIER ARREDONDO SÁNCHEZ, LUIS EDUARDO GAMBA y CARLOS ALBERTO RÍOS BARCO** en contra de la **SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.S. - SOCIMEDICOS S.A.S. y BALESTRA GROUP S.A.S. EN LIQUIDACIÓN.**

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Magistrada ponente,

Con firma electrónica al final del documento
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN

La Magistrada y el Magistrado,

Con firma electrónica al final del documento
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA

Con firma electrónica al final del documento
GERMAN DARIO GÓEZ VINASCO

Firmado Por:

Ana Lucia Caicedo Calderon
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Olga Lucia Hoyos Sepulveda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

German Dario Goetz Vinasco
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **aca68fb98282fa8b9a794e4f3dbab6a2aea6700790b8900ae243e2605e41222b**

Documento generado en 19/01/2024 01:42:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>